

RESOLUCION EXENTA N°: 957
CONCEPCION,27/05/2015

DEFENSORIA PENAL PUBLICA

DEFENSORIA REGIONAL DE BIO BIO

RESOLUCION EXENTA

Desígnese a Honorarios a (don/doña):	
Identificación del interesado:	
RUN	11.217.090 - 1
Nombre	JOSE QUIDEL LINCOLEO
Modalidad	A SUMA ALZADA
Agente Público	No
Descripción de la Función	CONVENIO N° 51: PERICIAS ANTROPOLOGICAS.
Labor	COMETIDO ESPECIFICO
Carácter	PROFESIONAL
Situación del Contratado	CON HONORARIO EN UN SERVICIO DISTINTO
Fecha Desde	20/03/2015
Fecha Hasta	31/12/2015
Jornada	OTRA
Horario	-----
Periodo de Pago	GLOBAL
Especifique monto Global	150
Tipo Moneda	UNIDAD TRIBUTARIA MENSUAL
Valor de cálculo de moneda en pesos chilenos	43198
Monto Total del Contrato expresado en pesos chilenos	6479700
Servicio de desempeño	DEFENSORIA PENAL PUBLICA
Dependencia de desempeño	DEFENSORIA REGIONAL DE BIO BIO
Región	VIII REGIÓN BIO-BIO
Comuna	CONCEPCION
Partida Capítulo Programa	10-9-1 : DEFENSORIA PENAL PUBLICA
Imputación Cuenta Complementaria	No
Beneficios	ALIMENTACION ESTADIA TRASLADOS
Comentario	-----
Subttulo Ítem Asignación	24-01-271: APLICACION ART/20 LETRA H DE LA LEY 19.718

Anótese, Comuníquese y Regístrese



REPÚBLICA DE CHILE
Ministerio de Justicia
Defensoría Penal Pública
Defensoría Regional del Biobío

APRUEBA CONVENIO PARA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE PERITAJE N° 51/2015.-

RESOLUCIÓN EXENTA N° 957
CONCEPCION, 27 MAYO 2015

VISTOS:

El DFL N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; el DFL N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; lo dispuesto en la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.718, de 2001, que crea la Defensoría Penal Pública; la Ley N° 20.798, de 2014, de Presupuestos del Sector Público para el año 2015; la Resolución Afecta N° 66, de 19 de Abril de 2012, que nombra al Defensor Regional del Biobío; la Resolución N° 869, de 2014, del Director Administrativo Nacional, que autoriza el presupuesto de apertura 2015 para la Defensoría Regional del Biobío y la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República que establece normas de exención del trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.718, corresponde al Defensor Regional autorizar la contratación de peritos para la realización de los informes que soliciten los abogados que se desempeñen en la Defensoría Penal Pública.

La necesidad de la Defensoría Regional del Biobío de contar con la opinión de expertos o profesionales que permitan apoyar o reforzar las tesis de defensa en las causas en la que presta servicios de defensa penal pública.

Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la letra h) del artículo 20 de la ley N° 19.718, en lo concerniente al informe de suficiencia de fondos para la contratación del perito, evacuado por el Director Administrativo Regional de la Defensoría Regional del Biobío.

RESUELVO:

1.- APRUEBASE el convenio a honorarios a suma alzada para la prestación de servicios de peritaje N° 51, de 20-03-2015, celebrado entre la Defensoría Regional del Biobío y don(ña) **JOSE QUIDEL LINCOLEO, RUT 11.217.090-1**, cuyo texto es el siguiente:

En Concepción, a 20-03-2015, entre la Defensoría Penal Pública, **RUT 61.941.900-6**, representada por el Defensor Regional del Biobío, don **OSVALDO RODRIGO PIZARRO QUEZADA, RUN 12.883.846-5**, abogado, ambos domiciliados en Avda. San Juan Bosco N° 2038 de la ciudad de Concepción, en adelante "la Defensoría", y don (ña) **JOSE QUIDEL LINCOLEO**, cédula nacional de identidad N° 11.217.090-1, de profesión Profesor de Educación General Básica con Mención en Ciencias Sociales y Mestre em Antropología, con domicilio en [REDACTED], correo electrónico: guidelin@gmail.com; en adelante "el perito" se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La Defensoría Regional del Bío Bío, de acuerdo a sus funciones y a los requerimientos de los defensores penales públicos, necesita contratar los servicios de don (ña) **JOSE QUIDEL LINCOLEO**, para la realización de un número indeterminado de pericias en la especialidad de Antropología, y eventualmente, de así requerirlo la Defensoría, la justificación de sus dichos y conclusiones en las respectivas audiencias judiciales y causas en que incidan dichos servicios.

Deberá entenderse por pericia, para efectos de este contrato, todas aquellas actividades realizadas por el experto, tendientes a entregar un informe fundado asociado a un imputado o condenado y a un caso específico, de acuerdo a las pautas contenidas en el Modelo de Gestión de Peritajes, elaborado por la Defensoría Nacional. La pericia debe contener un análisis de los hechos o circunstancias que sean relevantes jurídicamente para cada caso en particular, y todas las conclusiones que corresponda emitir conforme el respectivo requerimiento de informe pericial, desde la óptica de la ciencia, arte u oficio que desempeña el experto que se contrata, sujetándose para ello a reglas procedimentales y/o



defensor que lo hubiese solicitado y la boleta de honorarios electrónica del perito a su nombre. El pago se efectuará en las condiciones señaladas en el Modelo de Gestión de Peritajes.

Los valores establecidos incluyen impuestos y consideran los desembolsos en los que pudiere incurrir el perito tendientes a financiar todos los gastos derivados de la realización de la pericia y la elaboración del informe correspondiente, con la sola excepción de su comparecencia a audiencias en que deba testificar por su informe, la que será financiada en la forma que se indica en la letra siguiente.

Para proceder a efectuar el pago del informe, se requerirá la entrega del documento que contenga el encargo, la aprobación y evaluación a través del sistema informático de gestión de peritajes del defensor que lo hubiese solicitado y la boleta de honorarios del perito, a su nombre. El pago se efectuará en los términos y condiciones detalladas en la normativa legal y/o reglamentaria pertinente.

b) Gastos por Comparecencia a Audiencias y Juicio Oral en Apoyo a la Gestión del Defensor solicitante.

En el evento que, a requerimiento de la Defensoría, el perito además compareciere judicialmente en la causa donde se ha hecho valer el respectivo informe, y por ello deba desplazarse de su lugar de residencia, la Defensoría se obliga a rembolsar los gastos de alimentación y alojamiento asociados a esa comparecencia con un tope máximo de 3 UTM, cualquiera fuere el número de audiencias al que hubiese asistido, en relación a la causa, singularizada por su RUD y por el RUT del correspondiente imputado, debiendo gestionar directamente el perito la entrega de los referidos servicios.

Igualmente, si a requerimiento de la Defensoría el perito debiere comparecer judicialmente en la causa donde se ha hecho valer el respectivo informe, y por ello debiera desplazarse de su lugar de residencia, los gastos de traslado serán pagados por la Defensoría Regional respectiva y gestionados directamente por ésta, privilegiando traslados por vía terrestre, y eventualmente por vía aérea en aquellos casos en que el traslado comprometa más de 500 km., o en que existan dificultades de conectividad o transporte, que hagan necesario el recurrir a dicha vía de movilización.

Excepcionalmente los referidos gastos por concepto de traslado podrán no ser pagados directamente por la Defensoría sino que rembolsados por ésta al perito, siempre y cuando se encuentren dichos gastos debidamente respaldados y se circunscriban a los criterios ya expresados, según calificación de procedencia que al respecto haga la Defensoría.

El pago se efectuará una vez evaluada la(s) comparecencia(s) del perito en el sistema informático en uso, por parte del defensor solicitante, en las condiciones señaladas en el Modelo de Gestión de Peritajes. Lo anterior, cualquiera sea el número de audiencias a las que asista en relación a la causa.

El perito deberá gestionar el pago de dichas cantidades directamente, individualizando el RUD de la causa y el RUT del correspondiente imputado.

SEXTO: En ningún caso, la suma de los valores comprometidos o que se comprometan por las pericias solicitadas, o que se soliciten con cargo a este contrato podrán exceder las 150 U.T.M.

SEPTIMO: Las partes declaran y están contestes en que las pericias que se encomienden con cargo al presente contrato quedan sujetas a las necesidades y solicitudes concretas de pericias que presenten los abogados defensores y a la aprobación de las mismas por parte de los responsables y directivos del Servicio. Por ello, el presente acuerdo no obliga a la Defensoría Regional del Bío Bío en cuanto a la realización de un número mínimo o determinado de peritajes.

OCTAVO: Para el evento de la comparecencia, el(la) Perito(a) se obliga a efectuar la presentación oral conforme a lo señalado en el párrafo Sexto, Título III, del Código Procesal Penal, a fin de exponer el contenido y conclusiones del informe entregado y bajo las condiciones que establezca la Defensoría.

NOVENO: El (la) Perito(a) contratado(a) bajo la modalidad de suma alzada deberá informar a la Defensoría, mediante una declaración jurada simple, si presta servicios en cualquier calidad jurídica en otra repartición pública. En tal caso, deberá singularizar las particularidades de aquella contratación.

Asimismo, deberá informar si mantiene contratos con proveedores o contratistas o con instituciones privadas que tengan convenios para ejecución de proyectos o se le hayan otorgado transferencias, en relación con la Defensoría.

Si el perito tuviere pactada jornada laboral, bajo cualquier régimen jurídico, con algún servicio de la administración del Estado, deberá recuperar las horas de ausencia en las que hubiese incurrido para dar cumplimiento al encargo y a la eventual comparecencia judicial, a satisfacción del jefe superior de la institución a la que sirve.



DÉCIMO CUARTO: Considerando la naturaleza y objeto de este contrato, el producto final se regirá en íntegram por la Ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, conservando la Defensoría Penal Pública los derechos patrimoniales sobre la obra (Informe) de acuerdo a la legislación nacional y a los tratados internacionales que resulten aplicables en la materia.

DÉCIMO QUINTO: La vigencia de este contrato se extiende hasta el 31 de diciembre del año 2015, con todo, aquellas solicitudes que hayan sido aprobadas y en proceso de ejecución durante el año 2014 se imputarán al presente convenio.

La personería de don **Oswaldo Rodrigo Pizarro Quezada** para representar a la Defensoría Penal Pública, consta en Resolución N° 66, de 2012, del Defensor Nacional.

El presente convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder del Perito y el otro en poder de la Defensoría.

2.- DEJESE establecido que se adjuntan al convenio que en este acto se aprueba, las declaraciones juradas pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos, 54, 55 y 56 de la ley N°18.575 y a las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades de la Ley N°18.834.

3.- AUTORIZÉSE a el(la) Perito(a) para dar inicio a la ejecución de peritajes, sin esperar la total tramitación de la presente resolución exenta, atendidas las razones de buen servicio y el estado de las causas.

4.- IMPUTESE el gasto que irrogue el presente contrato por concepto de informes periciales a la asignación 24.01.271 hasta el límite de 150 UTM; y los eventuales gastos de comparecencia a audiencias y juicio oral de el(la) Perito(a) a las asignaciones 22.01.001; 22.08.007; 22.03.001 y 22.08.999, según corresponda, del presupuesto vigente de la Defensoría Penal Pública.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REMÍTASE A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA SU REGISTRO Y CONTROL POSTERIOR.



OSWALDO PIZARRO QUEZADA
DEFENSOR REGIONAL DEL BIOBIO
DEFENSORIA PENAL PÚBLICA

OPQ / HSF / PHR / mcm.-

Distribución:

- Contraloría General de la República
- Perito
- Oficina de Partes